



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, primero de marzo de dos mil veintitrés**

**20-096**

Proceso: **CONSULTA**  
Demandante: **MANUEL ADAN MORENO MONTOYA**  
Demandado: **COLPENSIONES**  
Radicado No.: **05001-31-05-005-2019-00267-01**  
Decisión: **CONFIRMA SENTENCIA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a conocer en el grado jurisdiccional de consulta la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 06** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

**Pretende** el demandante que se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar la reliquidación de la pensión de vejez reconocida mediante resolución No, 03939 del 5 de julio de 1990 en cuanto al IBL y la tasa de reemplazo de conformidad al artículo 20 del Decreto 758 de 1990; la reactivación de los incrementos pensionales por cónyuge a cargo que le fueron suspendidos sin justificación alguna debidamente indexados y las costas del proceso.

##### **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO, EN SÍNTESIS, LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- Que nació el 16 de febrero de 1930 por lo que cumplió los 60 años de edad el 16 de febrero de 1990 y cotizó al sistema general de pensiones 1.212, 86 semanas, por lo que el ISS le reconoció la pensión de vejez a partir del 3 de abril de 1990 en aplicación del Decreto 758 de 1990 con base en 1.196 semanas, teniendo en cuenta un IBL de \$151.822,79, al cual le aplicó una tasa de remplazo del 84% para una mesada inicial de \$127.531.
- Que al calcular el ingreso mensual base de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 20 del Decreto 758 de 1990 arrojó la suma de \$185.151,17, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 84% arroja una mesada de \$155.526 para 1990, encontrando que la mesada reconocida por el ISS en la resolución 03936 de 1990 es deficitaria.
- Que contrajo matrimonio con la señora GILMA ROSA MUÑETONES DE MORENO el 2 de marzo de 1967, con quien convive desde entonces de forma permanente sin haber llegado a separarse y quien además dependen económicamente de él, dado que no ha laborado, no tiene renta, ni pensión alguna, no recibe ayuda de terceras personas, por lo que depende económicamente de forma absoluta y exclusiva de él.
- Que en la Resolución No. 03936 del 5 de julio de 1990 el ISS le reconoció el incremento pensional por tener a cargo a su cónyuge, el cual le fue suspendido sin ninguna justificación en el mes de julio de 2004.
- Que el 8 de noviembre de 2017 solicitó la reliquidación de la pensión y la reactivación de los incrementos pensionales y a través de resolución SUB 2932020 del 20 de diciembre de 2017, la entidad negó la reliquidación y señaló que los incrementos fueron suspendidos, porque en el año 2004 el ISS había retirado ese beneficio a varios causantes sin especificar si en el caso concreto fue por no dependencia económica, por lo que le indicó que debía radicar nuevamente la documentación solicitando los incrementos.
- Que el 4 de enero de 2018 se presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los que fueron resueltos de manera negativa mediante resoluciones SUB 16284 de 2018 y DIR 2273 del mismo año.

### **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

COLPENSIONES dio respuesta a la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Respecto a los hechos señaló que acepta como cierto la fecha de nacimiento del actor, el contenido de la resolución que le reconoció la pensión de vejez y que en esta se le reconoció incrementos pensionales por cónyuge a cargo, el número de semanas cotizadas, el matrimonio con la señora GILMA ROSA MUÑETONES, la solicitud de reliquidación que se hizo a la entidad, así como la

respuesta negativa que se dio al actor a través de las resoluciones citadas. Respecto a los demás hechos señaló que no le constan por lo que deberán ser objeto de debate probatorio.

#### 1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, en **sentencia** proferida el 31 de julio de 2020 tras **DECLARAR** que el señor **MANUEL ADAN MORENO MONTOYA tiene derecho a que se reanude** el pago de los incrementos pensionales por cónyuge a cargo que le fueron reconocidos en la Resolución 03936 del 05 de julio de 1990, **CONDENÓ a COLPENSIONES** a reconocer y pagarle:

- La suma de **\$7.196.483** por concepto de incrementos no pagados desde el 8 de noviembre de 2014 al 31 de julio de 2020, suma que deberá ser indexada a la fecha de pago.
- Y las costas del proceso, fijando las agencias en derecho en la suma de \$359.824.

#### ABSOLVIÓ

-De reajuste de la pensión de vejez

### 2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

#### 2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Señaló que no es posible reliquidar la pensión de vejez del demandante en aplicación del Decreto 758 de 1990, dado que el mismo empezó a regir el 18 de abril de 1990 y el derecho a la pensión del demandante se causó el 16 de febrero de 1990, fecha en que cumplió los 60 años de edad y ya reunía más de las 1.000 semanas de cotización a que hacía referencia el Decreto 3041 de 1966, razón por la cual su prestación se reconoció de conformidad con dicha norma, por lo que no es posible dar aplicación retroactiva a una norma que entró a regir con posterioridad a la causación del derecho.

De otro lado, en cuanto a los incrementos pensionales, señaló que dado que al actor se le concedió la pensión de vejez en aplicación directa del Decreto 3041 de 1966, esta norma contemplaba los incrementos pensionales del 14% por cónyuge a cargo, los que incluso le fueron reconocidos al demandante con la resolución 03939 de 1990 que concedió la pensión, sin que se encuentre una razón justificable para que la entidad haya suspendido su pago en el año 2004, dado que en el presente proceso se demostró que aún persisten las condiciones que dieron origen al derecho, toda vez que en la actualidad el demandante aún convive con su cónyuge, pues nunca se han separado y esta depende económicamente de él ya que no tiene ningún tipo de ingresos.

Estimó también que si bien es cierto que conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que la acción para reclamar los incrementos prescribe, ya que estos no hacen parte integrante de la pensión, en el caso de autos no puede considerarse que la acción se encuentre prescrita, pues debe diferenciarse que una cosa es que haciéndose exigible el derecho el afiliado no lo reclame y otra que como en el caso de auto, reconocido el derecho, simplemente por la iniciativa de la entidad en desconocer el mismo, de forma infundada, se venga ahora a señalar que hay una prescripción por la mora del demandante en el reclamo, cuando el derecho ya entró a hacer parte del patrimonio del actor como un derecho debidamente reconocido en un acto administrativo. Por consiguiente, condenó a Colpensiones a reconocer los incrementos pensionales a partir del 8 de noviembre de 2014, dado que los anteriores se encuentran prescritos, junto con la indexación para compensar la depreciación del dinero por el paso del tiempo.

## **2.2. CONSULTA**

Toda vez que contra la sentencia de primera instancia no se interpuso ningún recurso, el proceso fue remitido para conocer el grado jurisdiccional de **CONSULTA**, según lo dispone el artículo 69 del CPT y SS modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, ya que la sentencia le fue adversa a COLPENSIONES, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de esta entidad, conforme a lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencias 51237 de 4 de diciembre 2013 y 40.200 de 2015, con ponencia de la Dra. Clara Cecilia Dueñas

## **2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

### **2.3.1. ALEGATOS DEL DEMANDANTE**

El apoderado del demandante indicó que se debe confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto reconoció los incrementos pensionales por personas a cargo, toda vez que estos ya habían sido reconocidos al demandante desde la resolución Nro. 03936 del 05 de julio de 1990, los cuales fueron suspendidos sin justificación alguna desde el mes de julio de 2004, pues tal y como que quedó demostrado, la cónyuge del actor no recibe pensión de cualquier naturaleza o cualquier otra circunstancias que legitimara la suspensión del subsidio. Además en respuesta a reclamación realizada el día 08 de noviembre de 2017, **COLPENSIONES** acepta que el ISS retiró los beneficiarios de los incrementos por dependencia económica en varios causantes, aceptando con ello la violación al debido proceso empleada por el ISS, violación que fue ratificada por COLPENSIONES al omitir

realizar las acciones o requerimientos que consideró prudentes para proceder con la reactivación del mismo.

Agregó que no solo con la reclamación, sino con el presente proceso judicial, se acreditó además de la calidad de pensionado del demandante, la calidad de cónyuge de la señora GILMA MUÑETONES y la dependencia económica respecto del demandante.

Finalmente manifestó que la sentencia SU 140 de 2019 no resulta aplicable al caso que hoy nos convoca, en atención a que esta sentencia analiza la situación de aquellos pensionados bajo el régimen de transición por remisión del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

### **2.3.2. ALEGATOS DE COLPENSIONES**

La apoderada de la entidad solicitó que se verificaran los cálculos efectuados por el Juez de primera instancia para la liquidación del retroactivo de los incrementos pensionales.

De otro lado, señaló que si bien la Corte Constitucional había indicado en sentencia SU 310 de 2017 que estos no prescribían también, lo cierto es que la misma Corte a través de Auto 320/18 declaró la nulidad de la anterior sentencia y posteriormente en la sentencia SU-140 de 2019 la Corte determinó que los incrementos previstos en el decreto 758 de 1990, para las pensiones mensuales de invalidez y vejez por cónyuge, compañero (a) o hijos menores o inválidos a cargo del beneficiario fueron derogados por la ley 100 de 1993. Por ello no hay lugar al reconocimiento de estos. En atención a ello el posible derecho del demandante prescribió desde el 20 de enero de 2010.

## **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

Se contrae en determinar si proceden la reactivación de los incrementos pensionales ordenados por el despacho analizando si los mismos se encuentran afectados de prescripción.

### **CONSIDERACIONES DE LA SALA**

En primer lugar, conforme a la Resolución 03936 del 5 de julio de 1990, que reposa a folio 27 del expediente digital, se encuentra probado que al señor MANUEL ADÁN MORENO MONTOYA le fue reconocida la pensión de vejez a partir del 3 de abril de 1990, en cuantía de \$127.531, oportunidad en la que se reconoció incremento por cónyuge por valor de \$5.744, según se ve:

RESOLUCION 03936 DE 5 JUL 1990

Por la cual se concede una prestación económica

LA COMISION DE PRESTACIONES DEL ISS - ANTIOQUIA

C O N S I D E R A N D O

Que MANUEL ADAN MORENO MONTOYA , con cédula o NIT 503.07 , presentó el 3 ABR 1990 en la seccional ANTIOQUIA solicitud de prestaciones económicas por vejez con los siguientes datos:

Nro. de afiliación: 900503073

Fecha de nacimiento: 16 FEB 1930

Ultimo patrono: MORENO LTDA.

Número patronal: 02013500760

Dirección: CR. 52 # 88ur-72 MEDELLIN

Número de semanas cotizadas: 1196

Que cumplidos los trámites reglamentarios, se comprobó que la solicitud reúne los requisitos legales exigidos para su otorgamiento.

R E S U E L V E

ARTICULO 1: Conceder la prestación solicitada así:

| A PARTIR DE | PENSION | INCREMENTO<br>POR CONYUGE |
|-------------|---------|---------------------------|
| 3 ABR 1990  | 127.531 | 5.744                     |

Si bien en la aludida Resolución no se hace referencia a la normatividad conforme la cual se reconoce la prestación, para la época se encontraba vigente el Decreto 3041 de 1966, dado que el Decreto 758 de 1990 solo entró a regir el 18 de abril del mismo año cuando se publicó en el diario oficial, por lo que le asistió razón al a quo en cuanto a cuál es la normatividad aplicable.

El Decreto 3041 de 1966 en su artículo 16 establecía:

- ARTICULO 16.** La pensión mensual de invalidez y la de vejez se incrementarán así:
- a. En el siete (7%) por ciento sobre la pensión mínima por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de 18 años si son estudiantes o inválidos de cualquier edad, que dependan económicamente del beneficiario, y
  - b. En el catorce pro ciento (14%) sobre la pensión mínima para el cónyuge del beneficiario, siempre que éste no disfrute de una pensión de invalidez o vejez.
- Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder el porcentaje máximo del cuarenta y dos por ciento (42%) sobre la pensión mínima.

Lo que significa que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES encontró acreditados los requisitos para que el actor tuviera derecho a los incrementos pensionales por tener una cónyuge que no estaba pensionada. Ahora, indica el demandante que desde el año 2004 el ISS le suspendió el pago del incremento pensional y según se observa en la Resolución SUB 293202 del 20 de diciembre de 2017, ante la solicitud del actor de que se reactivara el pago de los mismos la entidad respondió:

Con relación a la solicitud de Incrementos Pensionales del 14%, se aclara al solicitante que mediante requerimiento interno No. 2017\_12222675 se solicito a la Dirección de Nomina de Pensionados, aclaración respecto al retiro de la beneficiaria del incremento del 14%, a lo cual nos respondieron:

*(...) La única información que cuenta la Gerencia de Nómina es que para el año 2004 el ISS retiro los beneficiarios incrementos por dependencia económica de varios, causantes(...).*

Que de acuerdo a lo anterior, se aclara al solicitante que como quiera que el retiro de beneficiarios realizado por el ISS, se origino por dependencia económica, en aras de salvaguardar su posible derecho, es pertinente que aporte los documentos necesarios para efectuar un nuevo estudio de la prestación solicitada, los cuales pueden ser radicados en un Punto de Atención del Ciudadano PAC de Colpensiones.

Es decir, que la entidad no adujo una razón de fondo para haberle suspendido el pago de los incrementos que previamente le habían sido reconocidos.

Ahora, en el presente proceso conforme a las pruebas allegadas se probó que el demandante contrajo matrimonio con la señora GILMA ROSA MUÑETONES ESPINOSA desde el 2 de marzo de 1957, vinculo que continua vigente según registro civil a folio 57.

Así mismo, conforme la prueba testimonial quedó demostrada la convivencia y dependencia de la señora GILMA ROSA MUÑETONES ESPINOSA respecto del actor, dado que los mismos conviven desde hace más de 60 años, ella es ama de casa, nunca ha trabajado, no tiene ingresos ni bienes propios, por lo que su subsistencia deriva de lo que el pensionado aporta, siendo este el que sufraga la totalidad de gastos del hogar con el producto de pensión. Por lo que concluye la Sala que el demandante tiene derecho a que se reactive el pago de los incrementos pensionales que le habían sido reconocidos a través de Resolución No, 03936 de 1990, como de forma acertada lo consideró el a quo.

Valga aclarar que no le asiste razón a la apoderada de COLPENSIONES en sus alegatos cuando indica que no pueden concederse los incrementos pensionales porque conforme a los razonamientos de la sentencia SU-140 de 2019 estos fueron derogados, toda vez que lo que se analizó en sentencia es que después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se dio una derogatoria orgánica del art. 21 del Decreto 758 de 1990 que regulaba los incrementos pensionales y por ello quienes adquirieron el derecho a la pensión en vigencia de esta Ley, aún en aplicación del Decreto 758 de 1990 en virtud de la transición regulada en su artículo 36, **NO** tenían derecho a acceder al incremento pensional.

Sin embargo, esto no es lo que ocurre en el caso de autos, donde el señor MANUEL ADÁN MORENO adquirió el derecho pensional en vigencia del Decreto 3041 de 1966, es decir, con anterioridad a la Ley 100 de 1993 e incluso al Decreto 758 de 1990, por lo que en nada lo afecta el cambio normativo allí introducido pues para él ya era un derecho adquirido.

Respecto a la prescripción de los incrementos, cabe advertir que frente a tal aspecto, existen dos tesis, la primera, es la sostenida por la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral, según la cual el derecho a reclamar los incrementos se extingue por el paso del tiempo y la pasividad del acreedor en reclamarlo fijando como plazo el de tres años contados a partir de la fecha en que se adquirió estatus de pensionado, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social-CPT y SS- (En este sentido se pueden ver las sentencias SL9638 del 23 de julio de 2014, SL1585 del 18 de febrero de 2015 y STL1763 del 8 de febrero de 2017). Pero de otro lado, la Corte Constitucional ha indicado que el derecho a reclamar los incrementos es imprescriptible acudiendo al principio de favorabilidad y a partir de las siguientes razones: (i) El artículo 22 del Decreto 758 de 1990 establece que el derecho subsiste ligado a las causas que le dieron origen; (ii) Es reiterado el precedente constitucional en el que se ha indicado que el derecho no prescribe y (iii) Es más acorde con los derechos al mínimo vital y la dignidad humana indicar que el derecho al disfrute de los incrementos no prescribe. Este precedente se encuentra contenido en las sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-319 de 2015 y T-395 de 2016.

Incluso en la sentencia SU-140 de 2019, a pesar de haberse considerado que los incrementos pensionales habían sido derogados para quienes adquirieron el derecho con posterioridad a la Ley 100 de 1993, se estudió el caso de un accionante que había adquirido el derecho antes de que el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 fuera orgánicamente derogado, para indicarse que este derecho es imprescriptible y que lo que prescriben son las mesadas pensionales ya causadas. En esta oportunidad se dijo:

**1.1.** En efecto, de todos los accionantes, el señor Mario Ernesto Velasco fue único que adquirió su derecho de pensión antes de que el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 fuera orgánicamente derogado por la entrada en vigencia de la Ley 100. Tal hecho es suficiente para que, dicho sujeto haya adquirido el derecho de beneficiarse del incremento de su pensión en el 14% por la cónyuge que de él depende económicamente; derechos estos que, se reitera, desaparecieron para todos aquellos que adquirieron su derecho a pensionarse con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el 1º de abril de 1994.

**1.2.** En suma, el derecho de incremento pensional del 14% por cónyuge o compañera o compañero a cargo no prescribe para quienes completaron los requisitos de pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993- lo cual, se reitera, sucedió el 1º de abril de 1994- como es el caso del señor Velasco. Lo que prescribe son las mesadas pensionales ya causadas, precisando de todos modos que, conforme a la ley, tal prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda respectiva. Ciertamente, el incremento de 14% tiene una naturaleza *sui generis* tratándose de la pensión de jubilación y, por tanto, a pesar de no formar parte integrante de la pensión, le aplica la regla que indica que el derecho no prescribe sino las mesadas pensionales a reclamar, en tanto que el artículo 22 del Decreto 758 de 1990 dispone que *“el derecho a ellos subsiste mientras perduren las causas que les dieron origen”*.

Conocidas estas dos posiciones, esta Sala de Decisión, se adhiere a la sostenida por el máximo órgano de la Justicia Constitucional por encontrar que la misma es producto de la aplicación de principios como la igualdad y favorabilidad, principio este último a partir del cual en caso de duda en



la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho el operador jurídico debe optar por la situación que resulte más favorable al trabajador-afiliado-, siendo en este caso la más propicia aquella que no torna en definitiva la extinción del derecho.

Además, en el caso de autos, se presenta otra situación particular y es que el derecho a los incrementos pensionales ya había sido reconocido a actor a través de la resolución No. 03936 de 1990, pero por una decisión infundada por parte del ISS le fue suspendido de forma unilateral en el año 2004, por tanto, si bien el actor tan solo reclamó su reactivación el 8 de noviembre de 2017, según consta a folio 31, esto no significa la extinción del derecho, sino que prescribieron los incrementos causados con anterioridad al 8 de noviembre de 2014, tal y como en forma acertada lo analizó el a quo.

Así mismo en virtud de la Consulta se revisó la liquidación efectuada por el juez de instancia por el retroactivo de incrementos causados entre el 8 de noviembre de 2014 y el 31 de julio de 2020, el cual asciende a \$7.196.481, como acertadamente lo indicó el a quo, asó:

| AÑO   | SALARIO MÍNIMO | 14%        | NUMERO DE MESADAS | TOTAL        |
|-------|----------------|------------|-------------------|--------------|
| 2014  | \$616.000      | \$ 86.240  | 1 y 23 días       | \$ 152.357   |
| 2015  | \$644.350      | \$ 90.209  | 12                | \$ 1.082.508 |
| 2016  | \$689.454      | \$ 96.524  | 12                | \$ 1.158.283 |
| 2017  | \$737.717      | \$ 103.280 | 12                | \$ 1.239.365 |
| 2018  | \$781.242      | \$ 109.374 | 12                | \$ 1.312.487 |
| 2019  | \$828.116      | \$ 115.936 | 12                | \$ 1.391.235 |
| 2020  | \$877.803      | \$ 122.892 | 7                 | \$ 860.247   |
| TOTAL |                |            |                   | \$ 7.196.481 |

Finalmente, encuentra la Sala que también es acertada la condena a la indexación, pues conforme lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia esta procede para compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el transcurso del tiempo, pues el dinero correspondiente los incrementos pensionales aún no han ingresado al patrimonio del demandante, o en este caso de su sucesora procesal, y cuando lo haga se habrá visto envilecida o depreciada, por lo que también se confirmará la sentencia en este punto

En consecuencia la sentencia de primera instancia será **CONFIRMADA** en su integridad.

Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### DECIDE

**PRIMERO: CONFIRMA** la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor **MANUEL ADÁN MORENO MONTOYA**, identificado con c.c. **503.073** contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Demandante:            | <b>MANUEL ADAN MORENO MONTOYA</b>    |
| Demandado:             | <b>COLPENSIONES</b>                  |
| Radicado No.:          | <b>05001-31-05-005-2019-00267-01</b> |
| Decisión:              | <b>CONFIRMA SENTENCIA</b>            |
| Fecha de la sentencia: | <b>01/03/2023</b>                    |

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **02/03/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario